

El Reglamento (UE) n ° 269/2014, que goza de efecto directo y, por tanto, es obligatorio en todo sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros, gozando de primacía frente al derecho nacional (por todas, Sentencia del TJCE, Simmenthal de 9 de marzo de 1978) impone a todos los Estados miembros la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación efectiva de las medidas restrictivas establecidas por el mismo, lo que va a implicar el tratamiento de datos personales tanto de los propios sujetos identificados en el Anexo I del propio Reglamento, como el de las personas físicas, en cuanto tales o como representantes de personas jurídicas, asociadas a ellos, tal y como resulta de lo dispuesto en su artículo 2.

El tratamiento de los datos personales necesarios para la aplicación de dichas medidas deberá realizarse de conformidad con lo previsto en la normativa sobre protección de datos personales, tal y como expresamente contemplan los Considerandos 6 y 8 del Reglamento (UE) n ° 269/2014. Dicha normativa, en el momento actual, se encuentra recogida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, RGPD), complementado en España por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Para la correcta identificación de la base jurídica legitimadora del tratamiento de los datos personales, debe partirse del contenido del propio Reglamento (UE) n ° 269/2014 y, en particular, de lo señalado en su artículo 8:

*1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos:*

*a) proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, tal como información sobre las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 2, a las autoridades competentes del Estado miembro de residencia o establecimiento, y remitirán esa información a la Comisión, directamente o a través de los Estados miembros; y*

*b) cooperarán con las autoridades competentes en toda verificación de dicha información.*

*2. Toda información adicional recibida directamente por la Comisión se pondrá a disposición de los Estados miembros.*

*3. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo se utilizará exclusivamente para los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.*

El citado precepto impone una obligación de todas las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos de colaborar con las entidades competentes y con la Comisión Europea en el suministro y verificación de toda información que facilite el cumplimiento del Reglamento (UE) n ° 269/2014. Asimismo, el artículo 12 establece un deber de colaboración entre los propios Estados miembros entre sí y con la Comisión.

Por consiguiente, para la adecuada ejecución de las medidas que establece, el Reglamento (UE) n ° 269/2014 impone un amplio deber de colaboración, por lo que la legitimación del tratamiento de los datos personales se encontraría en la letra c) del artículo 6.1.e) del RGPD: *“el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento”*, siendo el propio Reglamento (UE) n ° 269/2014 el que legitima directamente el mismo, conforme a lo previsto en el artículo 6.3. del RGPD: *“La base del tratamiento indicado en el apartado 1, letras c) y e), deberá ser establecida por: a) el Derecho de la Unión, o b) el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento”*. Al mismo tiempo, la existencia de dicha base jurídica implica que no pueda apreciarse un desvío de finalidad, en la medida en que la compatibilidad del tratamiento para otros fines distintos de los iniciales viene directamente reconocida por el Derecho de la Unión, tal y como prevé el artículo 6.4 del RGPD: *“Cuando el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales no esté basado en el consentimiento del interesado o en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática para salvaguardar los objetivos indicados en el artículo 23, apartado 1, [...]”*

Por consiguiente, el tratamiento de los datos personales necesarios para la ejecución del Reglamento (UE) n ° 269/2014 por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, queda amparado en el cumplimiento de una obligación legal, sin perjuicio de que deban cumplirse con los restantes principios establecidos en el artículo 5 del RGPD, en los términos previstos en el RGPD y la LOPDGDD.

A este respecto, hay que tener en cuenta que el propio Reglamento (UE) n ° 269/2014 ha previsto garantías específicas para la protección del derecho fundamental a la protección de datos, como es la referida a la limitación de la finalidad a la que se refiere en el apartado 3 del artículo 8: *“Toda información*

*facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo se utilizará exclusivamente para los fines para los cuales se haya facilitado o recibido". En este mismo sentido, otra garantía específica es la comunicación por el Consejo a las personas físicas afectadas a las que se refiere el artículo 14.*

Por otro lado, al amparo del artículo 23 del RGPD, el Reglamento (UE) n° 269/2014 impone ciertas limitaciones a los principios y derechos de los afectados, como es la necesidad de hacer públicos, en el Anexo I, los datos personales a los que se refiere el artículo 3.3. Por otro lado, en relación con el principio de exactitud, y dada la dificultad que puede suponer identificar al titular real en los supuestos en que existan otras personas interpuestas, o, en la terminología del Reglamento (UE) n° 269/2014, "asociadas" a los sujetos identificados en el Anexo I, el mismo introduce una nueva limitación flexibilizando dicho principio al establecer, en su artículo 10, una exención de responsabilidad *en todo caso*, y, por consiguiente, también en al ámbito de la protección de datos personales, cuando se actúe de buena fe para su cumplimiento, siempre que no se incurra en negligencia.

De acuerdo con lo señalado, y atendiendo a la concreta consulta formulada en relación con el tratamiento de datos personales en el seno del Grupo de Trabajo de Seguimiento de Ejecución de Sanciones, constituido para el impulso de la colaboración entre los diferentes ministerios y organismos implicados en la ejecución de dichas sanciones, el mismo queda legitimado en la necesidad de cumplir con el propio Reglamento (UE) n° 269/2014, que de este modo actúa como norma específica de legitimación del tratamiento, encontrando su fundamento en el artículo 6.1.c. del RGPD.

Todo ello sin perjuicio de que deban cumplirse los demás principios recogidos en el artículo 5 del RGPD, singularmente los de limitación de finalidad, de modo que los datos personales no se utilicen para una finalidad distinta que la correcta aplicación del Reglamento (UE) n° 269/2014, y minimización, de modo que no excedan de los que sean necesarios para dicha finalidad.